

Que en consecuencia se hace necesario designar un Director Ad-Hoc para que conozca de las actuaciones administrativas que se adelanten en la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) relacionadas con la entidad promotora de salud NUEVA EPS S. A.;

Que el doctor Álvaro Rojas Fuentes quien ostenta la calidad de Director Técnico Código 103 Grado 02 de la Dirección de Liquidaciones y Garantías de la ADRES se designará para conocer las actuaciones administrativas que se deban adelantar en el despacho del Director General, relacionadas con la entidad promotora de salud NUEVA EPS S. A.;

En mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Designar al doctor Álvaro Rojas Fuentes, identificado con cédula de ciudadanía número 3230429, en su condición de Director Técnico Código 103 Grado 02 de la Dirección de Liquidaciones y Garantías de la ADRES, como Director General Ad-Hoc de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para conocer y decidir las actuaciones administrativas que deban adelantarse por la dirección de la entidad con la entidad promotora de salud NUEVA EPS S. A.

Artículo 2°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2018.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Salud y Protección Social,

Alejandro Gaviria Uribe.

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DECRETOS

DECRETO NÚMERO 0570 DE 2018

(marzo 23)

por el cual se adiciona el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, 1073 de 2015, en lo relacionado con los lineamientos de política pública para la contratación a largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica y se dictan otras disposiciones.

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 2° de la Ley 143 de 1994 y 6° y 7° de la Ley 1715 de 2014, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo previsto en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 142 de 1994, prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica y sus actividades complementarias constituyen servicios públicos esenciales y el Estado intervendrá en los mismos a fin de, entre otros, garantizar la calidad del bien y su disposición final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, así como su prestación continua, ininterrumpida y eficiente;

Que el artículo 2° de la Ley 143 de 1994 establece que el Ministerio de Minas y Energía, en ejercicio de las funciones de regulación, planeación, coordinación y seguimiento de todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad, definirá los criterios para el aprovechamiento económico de las fuentes convencionales y no convencionales de energía, dentro de un manejo integral, eficiente, y sostenible de los recursos energéticos del país, y promoverá el desarrollo de tales fuentes y el uso eficiente y racional de la energía por parte de los usuarios;

Que el artículo 4° de la Ley 143 de 1994 en sus literales a) y b), establece que el Estado, en relación con el servicio de electricidad, tendrá como objetivos en cumplimiento de sus funciones: i) abastecer la demanda de electricidad de la comunidad bajo criterios económicos y de viabilidad financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de los diferentes recursos energéticos del país; y ii) asegurar una operación eficiente, segura y confiable en las actividades del sector;

Que el artículo 6° de la mencionada ley consagra, dentro de los principios que rigen la prestación del servicio de energía eléctrica, el principio de adaptabilidad, que conduce a la incorporación de los avances de la ciencia y de la tecnología que aporten mayor calidad y eficiencia en la prestación del servicio al menor costo económico;

Que el artículo 12 de la misma ley establece que: “La planeación de la expansión del sistema interconectado nacional se realizará a corto y largo plazo, de tal manera que los planes para atender la demanda sean lo suficientemente flexibles para que se adapten a los cambios que determinen las condiciones técnicas, económicas, financieras y ambientales; que cumplan con los requerimientos de calidad, confiabilidad y seguridad determinados por el Ministerio de Minas y Energía; que los proyectos propuestos sean técnica, ambiental y económicamente viables y que la demanda sea satisfecha atendiendo a criterios de uso eficiente de los recursos energéticos”;

Que el Decreto 381 de 2012 estableció como objetivos del Ministerio de Minas y Energía “formular, adoptar, dirigir y coordinarlas políticas, planes y programas del Sector de Minas y Energía”;

Que los numerales 4 y 5 del artículo 2° del decreto citado establecen como funciones del Ministerio de Minas y Energía, “formular, adoptar, dirigir y coordinar la política

en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía” así como “formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las actividades relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país”;

Que la Ley 1715 de 2014 “Por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al Sistema Energético Nacional” en el literal e) del numeral 1 del artículo 6°, establece como competencia administrativa del Ministerio de Minas y Energía “... propender por un desarrollo bajo en carbono del sector de (sic) energético a partir del fomento y desarrollo de las fuentes no convencionales de energía y la eficiencia energética”;

Que estudios sectoriales realizados por la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) e instituciones financieras colombianas, evidencian el grado de concentración de la generación eléctrica del país y recomiendan que la diversificación de la matriz de generación de energía eléctrica colombiana debe ser una de las medidas principales en procura de la mitigación y adaptación frente al cambio climático;

Que en el artículo 1° de la Resolución MME 90325 de 2014, “por medio de la cual se adoptan los criterios de los planes de mitigación en los sectores de Energía Eléctrica, Minería e Hidrocarburos”, se adopta como línea de política de reducción de emisiones, para el sector de energía eléctrica, la promoción de fuentes no convencionales de energía renovable en el Sistema Energético Nacional con criterios de confiabilidad y sostenibilidad medioambiental, social y económica. Y que, para dar cumplimiento a esta línea de política, dentro del Plan de Acción Sectorial (PAS) se ha establecido como acción promover y apoyar la implementación de proyectos de fuentes no convencionales de energía renovables de mayor escala en el Sistema Interconectado Nacional;

Que la Ley 1665 de 2013 aprobó el “Estatuto de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA)”, entidad de la cual Colombia es miembro y cuyo objetivo, entre otros es promover “(...) la implantación generalizada y reforzada y el uso sostenible de todas las formas de energía renovable (...)”; y que dentro de los argumentos para ratificar dicho estatuto, se menciona que “(...) para el país resulta necesario explorar el uso de fuentes renovables que complementen la generación hidroeléctrica, ya que los impactos del cambio climático en Colombia acentúan las vulnerabilidades de este sector, lo cual puede poner en riesgo la seguridad energética del país (...)”;

Que la Ley 1844 de 2017 aprobó el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015 durante la COP21 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo cual ratifica la participación de Colombia en dicho acuerdo y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país, de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030 en el escenario Business as Usual (BAU) definido, de acuerdo con lo consignado en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC);

Que el numeral 14.18 del artículo 14 de la Ley 142 de 1994 establece que la regulación de los servicios público domiciliarios consiste en la facultad de dictar normas de carácter general o particular en los términos de la Constitución y la ley, para someter la conducta de las personas que presten los servicios públicos domiciliarios y sus actividades complementarias a las reglas, normas, principios y deberes establecidos por la ley y los reglamentos;

Que el artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 establece que las comisiones de regulación tienen la función y facultad especial de establecer fórmulas para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, cuando ello corresponda según lo previsto en el artículo 88; y señalar cuándo hay suficiente competencia como para que la fijación de las tarifas sea libre;

Que específicamente para la CREG, el literal d) del artículo 74.1 de la Ley 142 de 1994 establece que esta tiene la función y facultad especial de fijar las tarifas de venta de electricidad y gas combustible; o delegar en las empresas distribuidoras, cuando sea conveniente dentro de los propósitos de esa ley, bajo el régimen que ella disponga, la facultad de fijar estas tarifas;

Que el numeral 11 del artículo 4° del Decreto número 1258 de 2013, le atribuye a la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la función de “Elaborar los planes de expansión del Sistema Interconectado Nacional en consulta con el cuerpo consultivo, de conformidad con la Ley 143 de 1994 y las normas que lo modifiquen o reglamenten y establecer los mecanismos que articulen la ejecución de los proyectos de infraestructura con los planes de expansión”;

Que en los Planes de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión de energía eléctrica publicados por la UPME y en otros estudios sectoriales tales como el elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “Energías renovables variables y su contribución a la seguridad energética: complementariedad en Colombia”, se presentan análisis que demuestran la complementariedad entre fuentes no convencionales de energía renovable como la eólica, solar y de biomasa con los recursos hidroeléctricos convencionales, especialmente durante periodos estacionales e interanuales de baja hidrología;

Con base en lo establecido en el artículo 4° del Decreto 2897 de 2010 reglamentario de la Ley 1340 de 2009, compilado por el Decreto 1074 de 2015, se respondió el cuestionario establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio para efectos de evaluar la incidencia sobre la libre competencia de los mercados, donde aplicando las reglas allí previstas, la respuesta al conjunto de preguntas fue negativa, en la medida en que no plantea ninguna restricción indebida a la libre competencia;

Que en cumplimiento de lo ordenado en el numeral 8 del artículo 8° de la Ley 1437 de 2011, “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”,

en concordancia con lo previsto en el artículo 2.1.2.1.14 del Decreto 270 de 2017, el proyecto normativo se publicó en la página web del Ministerio de Minas y Energía y los comentarios recibidos fueron debidamente analizados e incorporados en el presente decreto en lo que se consideró pertinente;

Que en mérito de lo expuesto,

DECRETA:

Artículo 1°. Adiciónese una sección al Capítulo 8 del Título III del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía 1073 de 2015, así:

#### “SECCIÓN 7

#### LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN A LARGO PLAZO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

**Artículo 2.2.3.8.7.1. Objeto.** Establecer los lineamientos de política pública para definir e implementar un mecanismo que promueva la contratación de largo plazo para los proyectos de generación de energía eléctrica y que sea complementario a los mecanismos existentes en el Mercado de Energía Mayorista.

**Artículo 2.2.3.8.7.2. Ámbito de aplicación.** Esta sección aplica a los agentes del Mercado de Energía Mayorista.

**Artículo 2.2.3.8.7.3. Objetivos.** El mecanismo de que trata el artículo 2.2.3.8.7.1 de la presente Sección deberá procurar el cumplimiento de los siguientes objetivos:

- Fortalecer la resiliencia de la matriz de generación de energía eléctrica, ante eventos de variabilidad y cambio climático a través de la diversificación del riesgo.
- Promover la competencia y aumentar la eficiencia en la formación de precios a través de la contratación de largo plazo de proyectos de generación de energía eléctrica nuevos y/o existentes.
- Mitigar los efectos de la variabilidad y cambio climático a través del aprovechamiento del potencial y la complementariedad de los recursos energéticos renovables disponibles, que permitan gestionar el riesgo de atención de la demanda futura de energía eléctrica.
- Fomentar el desarrollo económico sostenible y fortalecer la seguridad energética regional.
- Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del sector de generación eléctrica de acuerdo con los compromisos adquiridos por Colombia en la Cumbre Mundial de Cambio Climático en París (COP21).

**Artículo 2.2.3.8.7.4. Revisión y seguimiento.** La UPME, de conformidad con las competencias asignadas en la normatividad vigente, realizará los análisis respectivos en cada Plan de Expansión de Referencia de Generación y Transmisión de energía eléctrica para verificar el cumplimiento de los objetivos del artículo 2.2.3.8.7.3 de la presente Sección, considerando incluso la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos (como el Fenómeno de El Niño), e informará al Ministerio de Minas y Energía para que se tomen las medidas correspondientes.

**Artículo 2.2.3.8.7.5. Características.** Para definir y establecer las condiciones del mecanismo de que trata el artículo 2.2.3.8.7.1 de la presente Sección, se tendrán en cuenta como mínimo los siguientes aspectos:

- Esquema competitivo de asignación.
- Criterios para la valoración del cumplimiento de los objetivos del artículo 2.2.3.8.7.3 de la presente Sección.
- Definición, volumen y plazo del producto que se asignará.
- Criterios para establecer la gradualidad y periodicidad de su aplicación, de acuerdo con los análisis elaborados por la UPME en los términos del artículo 2.2.3.8.7.4 de la presente Sección.
- Esquema de garantías y responsabilidades de los participantes.
- Entidades responsables de su implementación.

**Artículo 2.2.3.8.7.6. Traslado a la fórmula tarifaria.** La CREG, antes del 31 de julio de 2018, establecerá el esquema para trasladar los costos eficientes de compra de energía resultantes de la aplicación del mecanismo de que trata el artículo 2.2.3.8.7.1 a la tarifa de los usuarios finales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.11 de la Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes.

**Artículo 2.2.3.8.7.7. Otras disposiciones.** El Ministerio de Minas y Energía, la CREG, la UPME, y demás entidades competentes, en un plazo máximo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente Sección, adoptarán las medidas necesarias para actualizar la normatividad vigente que permita, entre otros, el planeamiento, conexión, operación, y medición para la integración de los proyectos de generación de energía eléctrica que se desarrollen a partir de la aplicación del mecanismo de que trata el artículo 2.2.3.8.7.1 de la presente Sección”.

Artículo 2°. *Vigencia.* El presente decreto rige a partir de su publicación en el **Diario Oficial**.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 23 de marzo de 2018.

JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN

El Ministro de Minas y Energía,

*Germán Arce Zapata.*

## SUPERINTENDENCIAS

### Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

#### RESOLUCIONES

#### RESOLUCIÓN NÚMERO 2018000021027 DE 2018

(marzo 21)

*por la cual se expide el anexo técnico para la implementación del Sistema de Control y Vigilancia de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, en virtud del Decreto número 026 de 2017 del Ministerio de Defensa.*

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, en uso de sus facultades Constitucionales y legales, en especial las conferidas por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por la Ley 1539 del 2012, y el Decreto número 2355 de 2006, y

#### CONSIDERANDO:

Que el literal d) del artículo 11 de la Ley 1119 de 2006, estableció como requisito para el estudio de las solicitudes de permiso para tenencia y porte de armas, un certificado médico de aptitud sicofísica para el uso de armas, dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional;

Que el 26 de junio de 2012 entró en vigencia la Ley 1539 de 2012, la cual establece en su artículo primero la obligación de obtener el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego a las personas naturales, que sean vinculadas o que, al momento de entrar a regir la ley, estén vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada (vigilantes, escoltas y supervisores) y que deban portar o tener armas de fuego;

Que la Ley 1539 de 2012, fijó en el término de un (1) año la vigencia del certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, expedido a las personas que estén vinculadas a los servicios de vigilancia y seguridad privada, por lo cual el certificado de aptitud psicofísica deberá renovarse en el término establecido en la ley;

Que el Decreto número 26 del 2017, reglamentó el Sistema Integrado de Seguridad que deberá ser implementado en la valoración médica y expedición de certificados aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego previsto en la Ley 1539 de 2012 y se adicionan los Decretos números 1070 y 1079 de 2015;

Que el artículo 3° del Decreto número 26 de 2017, otorga un plazo para que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, expida las condiciones y especificaciones técnicas complementarias;

Que el artículo 3° del Decreto número 2355 de 2011, establece que corresponde a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, las funciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden como suprema autoridad administrativa en materia de vigilancia y seguridad privada;

En mérito de lo expuesto el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

#### RESUELVE:

Artículo 1°. Expedir el Anexo Técnico para la implementación del Sistema Integrado de Seguridad de que trata la Ley 1539 de 2012, reglamentada por el Decreto número 26 del 12 de enero de 2017” proferida por el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Transporte, contenido en el anexo único de la presente resolución y hace parte integral del presente acto administrativo, que deberán acreditar y cumplir las Instituciones Especializadas que certifican la aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego, así como las personas que aspiren a ser proveedores del Sistema Integrado de Seguridad, las cuales previa evaluación satisfactoria, y posterior homologación y/o autorización por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada estarán habilitadas para prestar el servicio del sistema de seguridad.

Artículo 2°. *Exigencia.* Las disposiciones contenidas en el anexo técnico expedido en este acto administrativo serán exigibles en cuanto exista como mínimo dos proveedores autorizados por esta Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Parágrafo. Las Instituciones Especializadas acreditadas deberán dar cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas, dentro del mes siguiente a que se les comunique que efectivamente exista como mínimo dos operadores autorizados que hayan cumplido con los requerimientos y requisitos previstos en el presente anexo técnico.

Artículo 3°. El presente acto administrativo deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Artículo 4°. Envíese copia del presente acto administrativo a la Oficina de Comunicaciones para la publicación legal pertinente.

Notifíquese y cúmplase.

El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada,

*Fernando Martínez Bravo.*